

Imprimir

Flávio Bolsonaro superó a Lula en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, favorecido por la intervención estadounidense y un Partido de los Trabajadores demasiado cauteloso. Para ganar la segunda vuelta, Lula necesita dar a la clase trabajadora motivos para tener esperanza.

La presión estadounidense sobre el Tribunal Supremo de Brasil convirtió la campaña presidencial en una lucha por la corrupción judicial, el terreno predilecto de la ultraderecha. Para ganar la segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro, Lula necesita convencer más a los trabajadores brasileños. (Sergio Lima y Evaristo SA / AFP)

La primera vuelta de las elecciones brasileñas asestó un duro golpe al Partido de los Trabajadores (PT) y, en términos más generales, a la causa de la democracia en América Latina. En 2022, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo una ventaja de unos seis millones de votos sobre Jair Bolsonaro en la primera vuelta, un margen que se redujo a cerca de dos millones en la segunda vuelta. En esta ocasión, Flávio Bolsonaro superó a Lula por 2,2 millones de votos, una ventaja de tres puntos porcentuales.

Esto complica especialmente la segunda vuelta del 25 de octubre para Lula y la izquierda brasileña. Los candidatos que quedaron por detrás de los dos primeros, que en conjunto obtuvieron alrededor de seis millones de votos (aproximadamente el 6%), son todos de extrema derecha. Apoyaron al gobierno de Jair Bolsonaro y se opusieron al de Lula, por lo que es probable que se forme un amplio frente en su contra en la segunda vuelta. Existe una posibilidad real de que la familia Bolsonaro regrese a la presidencia.

Impulso de la derecha

La misma dinámica marcó las elecciones legislativas. En el Senado, el Partido Liberal (PL) de extrema derecha de Bolsonaro pasó de quince a veintiocho escaños, mientras que el PT se mantuvo con nueve (de un total de ochenta y uno). Las esperanzas de una mayor presencia femenina en el Congreso tampoco se cumplieron.

Las elecciones a gobernador contaron una historia similar. Sergio Moro, el senador ultraderechista que encarceló a Lula tras el golpe parlamentario y judicial contra Dilma Rousseff, ganó la gobernación de Paraná en la primera vuelta. La ultraderecha también obtuvo una victoria aplastante en estados ricos como Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

En la Cámara de Diputados, la cámara baja de Brasil, el PT tuvo un desempeño particularmente malo en el estado de São Paulo, donde figuras veteranas del partido como Paulo Teixeira, Nabil Bonduki y José Dirceu no lograron obtener escaños. La candidata más votada del PT en el estado, Luana Zaratini, recibió 230.000 votos, mientras que el candidato más votado del PL, Luciano Pavanato, obtuvo tres millones.

A nivel nacional, los partidos de izquierda con representación parlamentaria —el PT, el Partido del Socialismo y la Libertad, Rede y el Partido Comunista— pasaron de ochenta y ocho diputados a noventa y seis. Sin embargo, fueron superados por el PL de Bolsonaro, que pasó de noventa y nueve a 120 (de un total de 513).

El movimiento que ahora viene de arriba podría ser más peligroso que el que viene de abajo.

Cuando Bolsonaro fue elegido por primera vez en 2018, el ambiente general era de revuelta. La extrema derecha llegó al poder impulsada por un entusiasta movimiento popular que llenó las calles. Esto no ha sucedido con Flávio este año. A pesar del éxito electoral del PL y la fuerza del bolsonarismo en las urnas, el entusiasmo en las calles es tibio. Las promesas suenan menos a un plan para derrocarlo todo, como en la campaña anterior, y más a una continuación de la labor inconclusa de la derecha, especialmente la amnistía para la familia y la venganza contra el Tribunal Supremo. El movimiento que ahora surge desde arriba podría ser más peligroso que el que viene desde abajo.

Interferencia estadounidense

Contrariamente a lo esperado, la intervención estadounidense no se manifestó como una intromisión ruidosa por parte de Donald Trump y sus aliados. En cambio, parece haberse producido mediante una presión discreta pero efectiva sobre la Policía Federal y la Corte

Suprema, que se convirtieron en el centro del debate político.

Esto resultó particularmente perjudicial. En lugar de debatir cuestiones de política y programas, la campaña giró en torno a la corrupción, el terreno predilecto de la extrema derecha. Y esta vez, el debate se centró más en la Corte Suprema que en la presidencia.

Lo primero que hizo Washington tras la detención de Jair Bolsonaro fue aplicar la Ley Magnitsky, imponiendo sanciones al magistrado responsable del caso, Alexandre de Moraes, para castigarlo por perseguir al principal aliado de Trump en el continente. Desde entonces, la presión sobre el sistema judicial brasileño ha continuado, de forma menos visible, pero con mayor agresividad.

La propia conducta del tribunal lo convirtió en un blanco fácil. Sus magistrados tienen un historial de protección de los intereses burgueses, y la línea entre los asuntos públicos y privados está mal definida: los magistrados suelen convertirse en abogados multimillonarios una vez que abandonan el cargo.

Esta es la historia del escándalo del Banco Master. Jueces y, sobre todo, sus familiares estaban vinculados a contratos multimillonarios, favores, regalos y fiestas al estilo Epstein organizadas por el banquero fraudulento que se encontraba en el centro del mayor delito financiero en la historia de Brasil. Entre ellos estaba la esposa de Moraes, Viviane Moraes. Cinco de los once magistrados del tribunal estaban implicados, pero la crisis giraba en torno a Moraes, y la ultraderecha la utilizó para atacar a la figura que había encarcelado a Bolsonaro.

La cuestión clave sobre la revelación de los acuerdos secretos de Viviane Moraes es cómo el juez André Mendonça, un predicador evangélico de extrema derecha con estrechos vínculos con la derecha evangélica estadounidense, obtuvo acceso a los documentos confidenciales. La forma, la rapidez y el acceso del que disfrutó este funcionario nombrado por Bolsonaro sugieren con fuerza que hubo injerencia estadounidense en el proceso.

Durante una acalorada sesión del Tribunal Supremo, transmitida en directo por televisión un

mes antes de la votación, Moraes afirmó que el informe se había redactado en setenta y dos horas e insistió en que ese plazo era imposible para un documento de esa índole. Según él, los metadatos demostraban que el informe no había sido elaborado por la Policía Federal, sino por agentes externos, probablemente extranjeros, que simplemente entregaron el documento final a la policía.

En esta ocasión, la atención no se centró en las medidas adoptadas por la administración Trump, sino en las acusaciones de corrupción entre los jueces que habían apoyado al gobierno de Lula.

Moraes insistió en que los metadatos demostraban que la investigación policial se abrió y se cerró el mismo día en una computadora de la Policía Federal, lo que significaba que el informe simplemente se había insertado en ella. Describió esto como evidencia de un intento de injerencia extranjera en las elecciones brasileñas.

Mendonça también intervino durante la ofensiva contra Moraes destituyendo al jefe de la Policía Federal, a quien Lula había nombrado y quien había sido responsable de contener el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. La probable intervención de Estados Unidos en la controversia sobre el Tribunal Supremo cambió el rumbo del debate a favor de la derecha brasileña, en contraste con los aranceles punitivos que Trump impuso tras el encarcelamiento de Bolsonaro, que solo aumentaron el apoyo a Lula. En esta ocasión, la atención no se centró en las acciones de la administración Trump, sino en las acusaciones de corrupción entre jueces que habían respaldado al gobierno de Lula.

Un gobierno débil

Si bien el enfoque en la Corte Suprema sin duda facilitó las cosas para Bolsonaro, es imposible ignorar que el tercer gobierno de Lula ha sido el menos transformador de sus tres mandatos. Esto se explica en parte por la evolución de las instituciones brasileñas desde el golpe de Estado contra su sucesora, Dilma Rousseff.

El golpe de Estado contra Dilma fue, a la vez, un golpe del Parlamento y un golpe para el

Parlamento. La derecha conservadora en el Congreso la derrocó para instalar en la presidencia a una de sus figuras más destacadas, el vicepresidente Michel Temer. Al mismo tiempo, buscaba debilitar al poder ejecutivo y fortalecer al legislativo, mientras que, a costa de la presidencia, el proceso también fortaleció al Tribunal Supremo.

Como resultado de estos esfuerzos, la capacidad de Lula para gobernar se ha visto muy restringida y depende mucho más del Congreso, incluso en asuntos como el presupuesto. Bajo el mandato de Bolsonaro, el Congreso tuvo una participación institucional directa en la elaboración del presupuesto y la gestión autónoma del gasto público, algo nunca antes visto, y esta práctica ha continuado con Lula. Según el politólogo André Singer, Brasil ha pasado de un sistema presidencial basado en amplias coaliciones parlamentarias a algo más cercano a un régimen semipresidencial posterior al golpe de Estado.

Pero el debilitamiento de la presidencia no explica por sí solo el mal desempeño del PT. El gobierno tiene relativamente poco que mostrar en cuanto a la mejora de la vida de la clase trabajadora. Es cierto que el desempleo es más bajo que nunca, mientras que los niveles de hambre se han reducido a los de los gobiernos anteriores de Lula, tras un fuerte aumento bajo Temer y (sobre todo) Bolsonaro. Pero si bien la vida ha vuelto en gran medida a su forma prepandémica, las condiciones siguen siendo muy difíciles para los trabajadores.

En la última encuesta de Quaest antes de las elecciones, los votantes de hogares con ingresos de hasta el doble del salario mínimo (unos 620 dólares al mes) apoyaron a Lula frente a Flávio con un 52% frente a un 23%. Este grupo ha visto mejorar su calidad de vida a medida que la pobreza extrema disminuyó tras la pandemia.

Sin embargo, esto no bastó para compensar las pérdidas del PT en otros lugares. Entre los hogares que ganan entre dos y cinco veces el salario mínimo, Flávio aventajaba por un estrecho margen del 36% al 35%. Entre los que ganan más de cinco veces el salario mínimo, su ventaja era mayor, del 42% al 30%.

Si bien el hambre ha disminuido, los precios de los alimentos han seguido subiendo, aunque

en menor medida que durante el gobierno de Bolsonaro. La calidad de los alimentos ha disminuido, con un aumento de productos semiindustriales y precios más altos para la carne y otros alimentos básicos que eran mucho más accesibles antes de la COVID-19. La disponibilidad de carne es particularmente importante: desempeñó un papel central en la campaña de Lula en 2022.

Es imposible ignorar el hecho de que el tercer gobierno de Lula ha sido el menos transformador de sus tres mandatos.

El panorama laboral es similar. El desempleo ha disminuido, pero trabajar se ha vuelto más difícil. La administración de Temer eliminó una serie de derechos laborales, y ninguno de ellos se ha restablecido bajo el mandato de Lula. Los empleos bajo contratos de trabajadores autónomos (PJ), que amparan a los trabajadores independientes y autónomos, han crecido a expensas del empleo formal, lo que ha generado una mayor inseguridad. Gran parte de este crecimiento laboral se ha producido en sectores de servicios vinculados a aplicaciones y plataformas digitales, donde las malas condiciones y la falta de protección han empeorado la situación.

Deuda

El endeudamiento de la clase trabajadora es un problema particular. El endeudamiento de la clase obrera ha aumentado, y esto es especialmente relevante para el PT y para Lula, ya que la estrategia gubernamental del partido ha sido ampliar la capacidad de las familias para contraer deudas. En lo que respecta al transporte, por ejemplo, la estrategia principal fue ampliar el acceso a la compra de automóviles mediante crédito, en lugar de invertir fuertemente en transporte público.

Se produjo una enorme expansión del acceso a la vivienda para quienes ganaban entre una y cinco veces el salario mínimo. Sin embargo, casi todo provino de la subvención de la vivienda privada a través del programa Minha Casa, Minha Vida, que amplió el acceso a costa de endeudar a la gente. Las universidades públicas se expandieron, pero el mayor crecimiento

se dio en las instituciones privadas, mediante subvenciones y planes de financiación que también implicaron contraer más deuda.

En otras palabras, los logros de los gobiernos de Lula y Dilma se basaron en un mayor acceso a bienes como automóviles, vivienda y educación, adquiridos con un endeudamiento familiar cada vez mayor. Más de dos décadas después de la implementación de políticas que buscaban integrar a la clase trabajadora a la sociedad de masas mediante el consumo, el 80% de las familias ahora acumula altos niveles de deuda.

La izquierda y los movimientos de masas

Los esfuerzos por evitar conflictos con el Congreso, el Tribunal Supremo y la clase capitalista brasileña también dificultaron que el gobierno de Lula cumpliera sus promesas de campaña. Si bien se redujo la devastación de la selva amazónica, Lula convirtió la perforación petrolera en la desembocadura del río Amazonas en una de sus prioridades tras asumir el cargo, lo que representaba un grave riesgo de derrames a lo largo de la costa amazónica.

Su gobierno también anunció un plan que habría incluido tramos estratégicos de los ríos Madeira, Tapajós y Tocantins en el Programa Nacional de Privatización, con el objetivo de convertirlos en corredores de exportación de soja. Fue la movilización de movimientos indígenas y estudiantiles durante las protestas de la COP30 en Belém do Pará lo que detuvo el proyecto.

Entre los primeros partidarios de este fallido plan figuraban Guilherme Boulos, ministro a cargo de la secretaría general de la presidencia y de las relaciones con los movimientos sociales, y Sônia Guajajara, ministra de Asuntos Indígenas. Guajajara obtuvo 160.000 votos en las elecciones de 2022; en esta ocasión, recibió tan solo 54.000.

Lo más revelador fue el fracaso, o la falta de voluntad, del gobierno para convertir las luchas obreras en movilizaciones a su favor. La principal reivindicación de la clase trabajadora desde la elección de Lula ha sido el fin del sistema de jornada laboral 6x1 (seis días de trabajo seguidos de un día libre) y la reducción de la semana laboral. Sin embargo, el PT canalizó

esta demanda hacia una lucha puramente parlamentaria, sin huelgas ni protestas callejeras que la respaldaran.

La misma lógica desmovilizadora se aplicó a la huelga de los trabajadores de las aplicaciones (el *breque dos apps*), quizás el momento más explosivo de la lucha obrera en São Paulo en los últimos años. Si bien el gobierno tomó medidas para evitar la huelga, la única propuesta que ofreció a estos trabajadores fue crédito para comprar bicicletas.

Política exterior

En materia de política exterior, el gobierno de Lula nunca desarrolló una línea de oposición coherente a las políticas de la administración Trump. No cumplió con sus amenazas de gravar directamente los productos estadounidenses y prefirió negociar con Washington en lugar de invocar la Ley Magnitsky.

En relación con Palestina, Lula condenó tempranamente el genocidio israelí, y su gobierno se unió al caso de genocidio de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia el año pasado. Sin embargo, la administración también utilizó el Ministerio de Derechos Humanos para contrarrestar su relación con Tel Aviv. Silvio de Almeida, el ministro de Derechos Humanos que renunció al cargo en medio de acusaciones de acoso sexual, se negó durante meses a condenar el genocidio, alegando que era un asunto del presidente y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su sucesor, Macaé Evaristo, orientó el ministerio hacia una política de “combatir el antisemitismo” que implicaba visitas a instituciones judías, el Museo del Holocausto y sinagogas pro-sionistas, mientras ignoraba a la comunidad palestina y no tomaba postura contra la islamofobia.

La respuesta del gobierno al fallido golpe de Estado bolsonarista también fue insuficiente. Apoyó al Tribunal Supremo, pero se negó a perseguir a figuras importantes como el argentino Fernando Cerimedo, vinculado a redes de injerencia estadounidenses e israelíes en América Latina y que fue excluido de la acusación final del fiscal general, y Jovem Pan, el principal medio de comunicación que instigó el intento de golpe.

Ganar la segunda vuelta

Las medidas más populares de Lula en la recta final de la campaña electoral consistieron en modificar las posturas previas de su administración sobre estos temas. Su gobierno solo había intentado regular el crecimiento de las apuestas en línea, que han afectado gravemente a las familias trabajadoras, sobre todo las apuestas de fútbol. Ahora optó por prohibirlas por completo. Los pagos del programa Bolsa Familia, diseñado para reducir la pobreza y el hambre extrema, no se habían ajustado a la inflación de los últimos tres años. Esto cambió en vísperas de las elecciones.

Lula no ha logrado demostrar que él, y no la extrema derecha, representa el cambio.

El gobierno también comenzó a invertir en salud pública para combatir la obesidad mediante la compra de tratamientos como Mounjaro, algo que no había hecho anteriormente. Estos cambios en las políticas impulsaron el apoyo a Lula e incluso podrían haber evitado que Flávio Bolsonaro ganara directamente en la primera vuelta.

Si Lula quiere ser reelegido en la segunda vuelta, tiene que generar esperanza de cambio. Este ha sido el principal problema de la izquierda brasileña. Los bancos, las grandes empresas, la mayoría de los políticos y la mayor parte de los medios de comunicación se inclinan hacia la derecha, pero la percepción generalizada es que Brasil vive bajo un régimen de izquierda y que el bando de Bolsonaro representa la alternativa al statu quo.

Lula no ha logrado demostrar que él, y no la extrema derecha, representa el cambio. Esto se debe en parte a que su administración no ha sido un gobierno de cambio.

Las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos sumaron el 24% del electorado. La tasa de abstención, por sí sola, alcanzó el 21%, la más alta desde 1998. Para que el PT logre atraer incluso a algunos ex votantes de derecha y opositores al régimen, y para construir una base social propia en lugar de verla abstenerse, necesitará una estrategia más combativa basada en la movilización popular y social. Esa es la única manera de derrotar a la extrema derecha.

Aldo Cordeiro Sauda, periodista, abogado y activista del PSOL. Cubrió la Primavera Árabe desde El Cairo y Beirut para *O Estado de S. Paulo* y *Folha de S. Paulo*. Es candidato a doctor en ciencias políticas por la Universidad de São Paulo y fundador de *Contrabando Editorial*.

Fuente: Revista Jacobin

Foto tomada de: Revista Jacobin